

¿PUEDE LA DEMOCRACIA VOLVER A SER ALEGRE? (SI ALGUNA VEZ LO FUE)

Por **Toni Comín**

Diputado en el parlament de Catalunya y Profesor de Filosofía Social en la Universita Ramón Llull

1. LOS VERICUETOS DE LA DESAFECCIÓN Y DE LA(S) ABSTENCIÓN(ES)

Nuestras democracias están, dicen los sociólogos que saben del asunto, afectadas por un mal llamado "desafección". La gente ya no cree en los partidos, ni en los políticos, como se supone que había creído alguna vez. Los acepta como un mal menor. Pero el vínculo entre los ciudadanos y sus representantes legítimos parece que se va debilitando. Más allá de estudios empíricos, lo que sí podemos constatar en nuestra cultura política actual son una serie de sentimientos que, a menudo, están instalados en la mirada de la opinión pública hacia la cosa política:

- desinterés por una política que no es vista como la representación de la cosa pública, de la cual en principio parece que todos, en tanto que ciudadanos deberíamos sentirnos responsables, sino como una lucha entre partidos, por conseguir el poder, no se sabe muy bien con qué propósito
- aburrimiento ante un debate político en el cual los partidos no confrontan propuestas de manera constructiva, sino que se dedican a la

descalificación cotidiana del adversario, espoleados en tan poco creativa tarea en los medios de comunicación

- cansancio de una vida política que en España, en la última legislatura, se ha instalado en la crispación, fundamentalmente por obra y arte de la oposición
- pasividad derivada de la posición de espectadores en la cual la democracia mediática -o, mejor, hipermediática- sitúa a los ciudadanos
- aceptación resignada y pragmática de la democracia como un mal menor, sin épica ninguna, que permite que haya una cierta renovación de las elites que controlan y ejercen el poder político

Esta lista de sentimientos nos proporciona una foto en blanco y negro, deliberadamente parcial, tópica si se quiere, del actual estado de ánimo de la ciudadanía en nuestras democracias avanzadas. Al lado de estos sentimientos encontramos muchos otros de compromiso político activo, de participación, de confianza en el sistema de partidos. Los partidos, por ejemplo, siguen teniendo miles de militantes; y sería injusto decir que todos acuden a ellos en busca de cargos o de carreras

profesionales particulares. Por otro lado, somos los mismos ciudadanos quienes, al tiempo que criticamos la conversión de la política en un espectáculo mediático, reclamamos que los medios de comunicación construyan una narración pública de la vida política sin la cual el debate democrático sería, simplemente, imposible.

Sin embargo, estos sentimientos negativos existen. Probablemente en mayor intensidad que hace unos años. La fe (laica) en la democracia representativa parece que no va a más. Si acaso va a menos o, por decirlo metafóricamente, ha quedado trasmutada en un cierto agnosticismo. Los niveles de abstención son un síntoma bastante irrefutable de esta tendencia. Aunque también es cierto que a la hora de hablar de la abstención olvidamos que se trata de un fenómeno altamente complejo, con múltiples causas y de difícil encasillamiento.

Hay, por ejemplo, una abstención que procede de nuestra cultura consumista, de la lógica del individualismo posesivo, aquella que basa todas sus decisiones en el cálculo interés-beneficio. A partir del momento en que la lógica del mercado coloniza en las demás esferas sociales, las disfunciones están servidas. La ciudadanía debería basarse en el sentido del bien común, de la misma manera que las relaciones personales se basan, en principio, en el compromiso vital y la reciprocidad afectiva. Sin embargo, el funcionamiento del consumidor ha penetrado, sin apenas darnos cuenta, en todas las esferas de nuestras vidas: se construyen las relaciones personales como si de contratos mercantiles se tratase, se mira a los partidos como empresas que ofrecen unos productos (promesas electorales) susceptibles de ser comprados por los consumidores-ciudadanos. Los propios partidos han



contribuido a ello a partir del momento en que han aceptado gestionar la democracia de acuerdo con el paradigma del "mercado político" y han entendido la competencia electoral como si de la competencia empresarial se tratara.

Benjamín Barber explica que en una encuesta a los ciudadanos de un barrio de una gran urbe de los EE.UU. se les hacía dos preguntas: en primer lugar, cuál es el coche que más desearían y, en segundo, cómo es el barrio donde les gustaría vivir. La respuesta era contradictoria, sin que los encuestados pudieran saberlo: querían coches de gran potencia, con un alto nivel de contaminación acústica; pero querían barrios con muchas zonas verdes, poco asfalto y silenciosos. Ante la primera pregunta, los encuestados habían respondido *como consumidores* y ante la segunda lo habían hecho *como ciudadanos*, porque son las propias preguntas las que les inducen a ellos: el barrio es, por definición, una realidad colectiva, mientras que el coche es un bien individual. Concluye Barber que el problema no es de los ciudadanos, que de manera natural tenemos intereses incoherentes entre sí, sino de las instituciones y del equilibrio entre

política y mercado: ¿cuáles son las preguntas que nos inducen a hacernos nuestras instituciones?, ¿nos inducen a pensar como ciudadanos o como consumidores?

El problema es doble. Por un lado, el mercado ha arrinconado a la política, a los gobiernos democráticos, a un rincón del escenario. Por el otro, esta política *arrinconada* funciona, ella misma, cada vez más con la lógica y los parámetros del propio mercado. Es una doble colonización. No es de extrañar, pues, que si los partidos se dirigen a los ciudadanos como consumidores, éstos actúen como tales. Si hacen el cálculo coste-beneficio, en una sociedad con un alto nivel de vida medio, hay muchas personas que concluyen que el voto no les reporta ningún beneficio *individual, directo*. Aunque ellas no voten, habrá igualmente gobierno y administración pública que se ocupe de los intereses generales. La política, piensan, no desaparecerá aunque ellos desaparezcan de la política. Y, por tanto, no votan.

Esta abstención, pues, pasa de la política, no porque esté desencantada con el funcionamiento de los partidos, por las insuficiencias del sistema democrático, sino porque "no le sale a cuenta", porque el hecho político en sí mismo no le interesa -en el sentido más mercantil de la palabra "interés"- . Pero al lado de esta abstención hay muchas otras. Hay una abstención que, de hecho, es la abstención de la que menos se habla y, en cambio, desde una perspectiva progresista, es la que más nos debería preocupar: aquella que viene a ser un síntoma, uno más, de la exclusión social, del hecho de vivir en la periferia del sistema. Todos los estudios muestran que la participación electoral aumenta con el nivel de renta y disminuye cuando menor es éste. Esto ocurre por igual en España, en Estados Unidos, en Dinamarca o en la India. La

ciudadanía política, pues, está determinada intensamente por el factor *clase social*.

Por un lado, parece lógico: si hay unos ciudadanos en la base de la pirámide de la distribución social, en la periferia del mercado de trabajo, excluidos de las ventajas del sistema económico, estos ciudadanos tampoco participan de la vida política. La marginación socioeconómica va de la mano de la marginación política. Por otro lado, si se mira bien, es una dramática paradoja. En un sistema capitalista, la política es el único recurso que le queda al eslabón más débil del sistema productivo para defender sus derechos. Aquello que el sistema de mercado no les proporciona por sí mismos -como por ejemplo, derechos sociales, seguridad vital y económica, etc.- lo pueden conseguir a través de la política, del Estado. La democracia se funda en un principio de igualdad, mientras que el capitalismo basa su éxito en unos incentivos basados en la desigualdad. Por esto, la democracia, la política debería ser, como decimos, el "refugio de los perdedores" del sistema socio-económico. Pero los hechos son los hechos, y todos los estudios empíricos nos demuestran que no es así.

2. VOTAR SÍ, SIEMPRE QUE SEA POR ALGUIEN QUE PINTE ALGO

Pero hay un tercer tipo, como mínimo, de abstención. No es la abstención de aquellos que se autoexcluyen por tener una mirada mercantil sobre la democracia. Ni la de aquellos que se autoexcluyen de la vida política porque han sido, previamente, excluidos de la vida económica. Hay una tercera abstención que siente un malestar con el funcionamiento del sistema democrático, precisamente porque mantiene intacta la fe en los principios que lo fundan. Son aquellos que consideran que el sistema



de partidos no está a la altura de lo que debería ser una democracia digna de tal nombre, a las puertas del siglo XXI.

Nos atrevemos a distinguir dos motivos fundamentales por los cuales, una parte de nuestros ciudadanos se sienten decepcionados por nuestras actuales democracias. Por un lado, están aquellos que perciben que los gobiernos cada vez tienen menos que decir en la regulación de nuestra vida social.

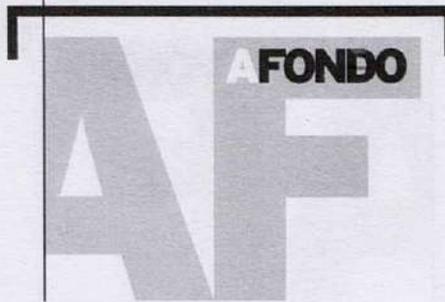
Ciertamente, con la globalización de la economía los mercados capitalistas, que hasta hace unas décadas eran mercados nacionales, han pasado a integrarse en un único mercado mundial. La economía se ha globalizado: tenemos unos pocos centenares de empresas transnacionales de las cuales depende el 80 % del comercio mundial, tenemos unos mercados financieros en los cuales los fondos de inversión y los principales bancos del mundo operan con total libertad, sin restricción alguna. En cambio, la política sigue sin globalizar: la vida democrática sigue teniendo como principal instrumento un par de centenares de Estados-nación que, cada uno de ellos por separado, no tienen mucho que hacer para regular los mercados globales.

¿Cómo podría un gobierno en solitario regular el comercio o las finanzas globales? Sin embargo, la vida concreta de los ciudadanos concretos depende cada vez más de estos mercados globales y del desempeño que en ellos hagan las empresas, que se deslocalizan, o los sistemas financieros interconectados en una única red global que, como volvemos a ver estos días, cada pocos años quedan atrapados en una crisis sistémica que acaba afectando la economía doméstica de millones de ciudadanos de todo el planeta. Si nuestra vida concreta depende de los mercados globales y los gobiernos democráticos -a pesar de su nombre- no

tienen nada que hacer para gobernarlos en beneficio nuestro, ¿para qué votar? Si los gobiernos no cuentan, no pueden hacerse cargo del interés general, si el pacto social global, del cual dependen las condiciones reales de vida de las personas, ha sido sustraído de la esfera de la política, ¿qué más da un gobierno que otro? Al final, gobierne quien gobierne, seguiremos estando ante un gobierno sin poder real. Porque el poder real se ha desplazado desde la política a la economía, desde la democracia a la empresa. Este es otro de los motivos de la crisis de legitimidad que viven nuestras democracias.

Ante este problema, la receta es fácil de proponer y difícil de hacer. Se trata, por supuesto, de globalizar la política. Pero esto supone varias cosas. La primera de ellas, disponer de instituciones internacionales con poder real de regulación de la economía mundial y, en la medida en que dispongan de poder efectivo, con una legitimidad y un funcionamiento democrático. No podemos construir instituciones mundiales más poderosas de las que tenemos hoy si no son, al mismo tiempo, más democráticas de las que tenemos hoy. En segundo lugar, quiere decir construir Estados que superen la dimensión nacional y se adentren en una dimensión supranacional, esto es, de dimensión regional. La UE es el primer intento serio de Estado-región, si descontamos aquellos Estados que, por su propia dimensión de partida, son ya en sí mismos Estados regionales (China, India, Rusia y los EE.UU.).

La existencia de Estados-región abriría la puerta a la emergencia de partidos políticos supranacionales, que sean verdaderos *global players*, actores políticos que puedan influir a escala global, de la misma manera como algunas grandes empresas



transnacionales o algunos bancos de la comunidad financiera internacional son, hoy, auténticos *global players* de la economía global. Una Europa política necesita partidos europeos. La izquierda europea es quien más se juega en ello: tiene que encontrar los mecanismos de organización que le permitan tener una voz identificable en la sociedad mundial. Puede parecer un sueño, una utopía ingenua, pero hoy ya existen partidos que son, de hecho, *global players*: ¿acaso no lo son el Partido Republicano o el Partido Demócrata de los EE.UU.? ¿No lo es el Partido Comunista Chino? ¿Por qué no iba a tener el ciudadano europeo de izquierdas un partido que lo represente en el concierto global?, esta es la cuestión. Pero para ello, insistimos, hace falta un cambio de dimensión: pasar de los partidos de escala nacional a otro partido, aún por hacer, de escala continental.

La función del Estado Social -la última frontera conquistada en el largo proceso de democratización de nuestras sociedades- ha sido, históricamente, controlar, desde las instituciones políticas democráticas, los desmanes del capitalismo. La izquierda moderna nació para esto y no para otra cosa: para humanizar -ya fuera vía reforma o vía revolución- unas sociedades industriales que el capitalismo convertía a la vez en lugares tan prósperos como injustos. Si el primer objetivo de nuestros sistemas políticos es, hoy, salvaguardar las conquistas de la modernidad en términos de derechos, de humanización de las estructuras sociales y de justicia, entonces habrá que adaptar el Estado Social a la nueva realidad global. Y, en nuestro caso, la manera de hacer esto es construir la Europa política. Hace falta la Europa política para rehacer a escala europea el Estado Social, para recrearlo de acuerdo con las reglas del juego de la economía del conocimiento, de los

mercados globales. Y hace falta la Europa política para regular la sociedad global, para contribuir a domesticar la globalización neoliberal y dotarla de reglas que pongan los mercados globales al servicio del desarrollo humano. Hay que rehacer el Estado Social Europa para adentro, y hay que exportarlo Europa para afuera.

3. LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA SE ARREGLAN CON MÁS DEMOCRACIA

En último lugar, entre los abstencionistas *críticos con el sistema* hay otro motivo a considerar, seguramente el más relevante de todos y que no es otro que la crisis misma del *principio de delegación* o del *principio de representación*. Hay algunos ciudadanos que, de alguna manera, nos vienen a decir que antes que participar mal, antes que ejercer una participación de mala calidad, mejor no participar. Y, más allá de los abstencionistas, una parte importante de la ciudadanía expresa su malestar por lo estrecho de las formas de participación que prevé el sistema de democracia representativa de partidos que hemos heredado del siglo XXI.

Hoy, en la cultura política dominante de la mayoría de sociedades adelantadas se reconoce de manera generalizada la idea que "la democracia no es votar sólo cada cuatro años", lo cual indica que hay una cierta conciencia que nuestro sistema político se encuentra en un grado de evolución todavía imperfecto. Los ciudadanos, a menudo, visualizan la democracia actual como un sistema en el cual una elite política que controla los partidos se comporta como una casta que ejerce un casi-monopolio del poder político. A menudo el ciudadano tiene el sentimiento que el único papel que le queda es, prácticamente, elegir entre las diferentes elites que se disputan el poder



institucional: hacer de juez en una competición en la cual los jugadores son otros. El papel que le concede la democracia representativa es eminentemente pasivo.

Pero un sistema democrático no puede funcionar, en los primeros años del siglo actual, con los mismos métodos e instrumentos del pasado. El *principio de delegación* no es suficiente. Aunque seguimos creyendo en la virtud de las instituciones representativas y en el rol irremplazable de los partidos para elaborar programas y proponer políticas, por racionalizar el debate político y encarnar posiciones ideológicas con las cuales se puedan identificar los ciudadanos, etc., hoy los ciudadanos disponen de un nivel de formación demasiado elevado como para aceptar sin más la mera delegación de su poder en una clase política profesional que, a menudo, es vista como una "casta" separada de la vida real y que, aun así, monopoliza la vida pública a través de los medios de comunicación. Entre consulta y consulta electoral, el sistema de delegación deja demasiado a menudo a los ciudadanos al margen de las deliberaciones y de las grandes decisiones. Votar, en muchas democracias maduras, se ha convertido en un *acto triste*: ya no es un acto impulsado por la emoción alegre que está implícita en la posibilidad de elegir aquellos que nos gobiernan, sino un acto desencantado en el cual el ciudadano tiene la sensación de alienar el trozo de soberanía que le corresponde en beneficio de un representante con quien, de hecho, no se identifica.

En una sociedad donde las informaciones abundan, donde la influencia de la televisión se ha hecho enorme, la ciudadanía desarrolla sus opiniones -y emociones- en tiempo real, crece la demanda de una mayor participación -y más directa- en la toma

de decisiones. De hecho, el proceso político se despliega a través de muy diversas fases y actividades: la movilización de los ciudadanos o de los militantes, la información, el debate y la deliberación, la toma de decisiones propiamente dicha, el control de las instituciones y de los cargos electos... En cada una de estas fases, el espacio para la participación de los ciudadanos es mucho más grande que no la mera delegación de la soberanía en unos actores -los partidos políticos- especializados en el ejercicio del poder político. De hecho, uno de los problemas de las democracias representativas es que, en una sociedad que se caracteriza por una complejidad creciente, es imposible detectar desde los partidos políticos la diversidad de situaciones, demandas y necesidades que se generan en distintas esferas.

Por todos estos motivos, parece del todo imprescindible complementar el *principio de delegación* con el *principio de participación directa* de los ciudadanos en la vida política, transitando de nuestras democracias representativas a otro paradigma democrático, que se ha dado en llamar *democracia participativa*. De hecho, la



idea de democracia participativa no pretende *suplantar* los mecanismos de la democracia representativa por nuevos mecanismos de democracia directa. En absoluto: se trata de ensanchar el universo de mecanismos políticos posibles ofreciendo a los ciudadanos, junto a los mecanismos representativos tradicionales, nuevos mecanismos de participación. Cuando hablamos de democracia participativa no nos referimos, pues, a un proceso de *sustitución* de la democracia representativa por la democracia directa. Se trata, más bien, de transitar desde una esfera política monopolizada por los partidos a una nueva esfera ampliada, en la cual la democracia directa y la representativa compartan el espacio, la capacidad de decisión y la legitimidad.

Podemos imaginar tres vías principales -tres autopistas- desde las cuales abrir nuestras democracias al *principio de participación*:

- En primer lugar, abrir las mismas instituciones representativas a la participación directa de los ciudadanos. Esto se puede hacer tanto en el momento de la deliberación, como de la decisión, como en la fase de control y fiscalización. Los referéndum y las iniciativas legislativas populares son los instrumentos que las democracias representativas ya habían adelantado en esta dirección. Pero se trata de instrumentos preferentemente vinculados a la esfera legislativa. Ahora, en pleno siglo XXI, el reto es añadir otros muchos instrumentos y hacer de la administración local el banco de pruebas por antonomasia de estas innovaciones. Consultas ciudadanas, presupuestos participativos, o los consejos ciudadanos con carácter vinculante son ejemplos de participación ciudadanos a escala local en el momento de la toma de decisiones. Internet y la democracia electrónica

abren un campo inalcanzable a la hora de promover el debate y la deliberación pública. Los jurados ciudadanos son un intento de abrir al ciudadano, individualmente considerado, la función de control de la actuación de los gobiernos y las administraciones, empezando por fiscalizar el cumplimiento de las promesas que hacen los partidos en periodo electoral y en sus planes de gobierno.

- En segundo lugar, hay un extenso campo a explorar por el qué hace a la reforma de los partidos políticos. Se trata de establecer mecanismos de participación y de transparencia que, de hecho, permitan reconstruir el principio de delegación. En efecto, si en los mecanismos de elección de los candidatos y en los mecanismos de elección de los representantes damos la voz a la gente, a los militantes y a los simpatizantes, a los electores, no estamos haciendo más que reforzar y relegitimar estos representantes. ¿No sería bueno empezar a normalizar el sistema de primarias, en el interior de los partidos políticos, para que sean las bases quienes elijan a sus candidatos? ¿No sería bueno empezar a votar listas desbloqueadas (lo que normalmente se conoce como listas abiertas) para que los electores elijan, dentro de un partido, el candidato que más les convence?

- En tercer lugar, hace falta reconocer que la participación política no sólo se hace desde los partidos, o desde las instituciones. También desde la sociedad civil se puede intervenir en el proceso político. Los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil deben tener la posibilidad de intervenir -y de hecho, ya lo hacen- en las fases de movilización y de información, de hacer propuestas programáticas, de participar en la deliberación y en el debate. Y tienen, en fin, que poder ejercer funciones de



control del poder público. Hablamos de las ONG, de los sindicatos, del mundo asociativo y de las redes de toda clase. Es cierto que no debemos confundir los papeles: estos actores tendrán más o menos capacidad de incidir en la toma de decisiones en función de la capacidad de convicción de sus argumentos. El suyo es un poder "moral". La legitimidad para tomar las decisiones que a todos afectan, en democracia, la tienen que seguir ostentando los gobiernos y los parlamentos democráticamente elegidos. Pero hace falta que, simétricamente, los partidos acepten compartir muchas fases del proceso político -debate, deliberación, movilización, control, etc.- con todos estos otros actores civiles.

Si avanzamos por estos tres caminos -por estas tres "autopistas de la participación"- habremos roto tres monopolios que hoy lastran nuestras democracias (las lastran quizás no en lo que se refiere a su eficacia para resolver problemas, pero sí en lo que se refiere a la legitimidad para hacerlo): el monopolio de los aparatos en el seno de los partidos, el monopolio de los partidos en el seno de las instituciones y el monopolio de los partidos políticos en relación a su función de intermediación entre los ciudadanos y las instituciones, entre los representantes y los representados. Y con esto habremos conseguido una democracia más madura y, en una palabra, más digna de su nombre.

La historia nos dirá si nuestras democracias avanzarán por estas "autopistas". Si miramos hacia atrás, más bien encontraremos motivos para el optimismo. Porque la historia de nuestros sistemas políticos es la historia de la profundización de nuestras democracias, la historia de la superación de un paradigma democrático por otro más evolucionado. En efecto, las sociedades europeas empezaron su experiencia democrática a través del voto censatario,

en virtud del cual votaban sólo los hombres propietarios. De la democracia censataria se avanzó hasta el sufragio universal masculino -es decir, no universal-. Y de éste se pasó al sufragio universal *tout court*, mujeres incluidas. El paso de la democracia censataria a la democracia representativa de sufragio universal fue un proceso de extensión progresiva de los *sujetos* de la participación. El paso de la democracia representativa a la democracia participativa -el paso que parecen requerir nuestros sistemas políticos hoy- quiere ser un proceso de extensión progresiva del *objeto* de la participación.

Si observamos bien, veremos que cada nuevo paradigma de sistema democrático nunca pretende suprimir sino que conserva los rasgos propios del paradigma anterior. La democracia censataria se basa en el voto de los propietarios masculinos para elegir sus representantes; la representativa mantiene este voto pero lo amplió al resto de la población y con esto aparecieron los partidos de masas. La democracia participativa mantiene también este sufragio universal -y, por lo tanto, los partidos que se legitiman a partir de él- pero añade mecanismos de participación directa en las instituciones por parte del ciudadano. La sustitución de un paradigma por el siguiente viene a ser, en realidad, un proceso de progresiva ampliación del alcance y de la intensidad del principio democrático a la hora de organizar las instituciones y los procedimientos de toma de decisiones. Con el avance democrático, ningún derecho anterior es suprimido, pero es evidente que cuando los derechos políticos dejan de ser exclusivos y pasan a ser compartidos, el poder político se desconcentra y pasa a estar más repartido. Sin embargo, ¿quién podría detener este proceso de democratización progresiva? ■